

APORTES DE LA PERSPECTIVA AUTOGESTIONARIA DE LA PRODUCCIÓN DE HÁBITAT EN LA RECONSTRUCCIÓN EN CHILE

Susana Aravena, Alejandra Sandoval: **SUR Corporación**
www.sitiosur.cl

En este artículo presentamos algunas reflexiones que surgen a partir del escenario que representa el terremoto desde la perspectiva del desarrollo de experiencias de autogestión de hábitat. La mayor parte de las ideas aquí expresadas son resultado de diversos espacios de intercambio¹ con dirigentes y organizaciones que en Chile han iniciado una búsqueda de alternativas de producción de hábitat que incorporen modalidades autogestionarias y recuperen una tradición de cooperativismo, que fue prácticamente eliminada tras años de imposición del modelo neoliberal de producción de ciudad y vivienda en nuestro país.

Así también corresponde señalar que parte importante de este proceso considera las reflexiones y aprendizajes motivados por el vínculo que Chile ha retomado con la Secretaría Latinoamericana de Vivienda popular, y en ese marco en particular, las Jornadas Solidarias de Organizaciones Sociales para la reconstrucción en Chile realizadas en el mes de abril², ocasión en la que pudimos compartir, en conjunto con dirigentes sociales en el contexto de las zonas más afectadas por el terremoto, tanto el diagnóstico como perspectivas acerca del proceso de reconstrucción en Chile.

¹ En particular se realizó el 25 de marzo una reunión de la red de organizaciones por el hábitat popular en Chile a compartir un diagnóstico sobre el terremoto, y luego el 31 de marzo la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad de la cual formamos parte, organizó el foro "Perspectivas de la reconstrucción desde la organización social".

² Aprovechamos de agradecer el valioso aporte que fue para nosotros la visita de compañeros y compañeras de la SELVIP, de las cooperativas del MOI: La Unión, Perú, La Fábrica, Mate Amargo, El Molino, como también de todas las personas y dirigentes que nos recibieron en las distintas localidades que visitamos: Villa Olímpica, Barrio Franklin, Talca, Constitución, Parral, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Dichato.

Creemos que existe en la coyuntura actual la oportunidad de repensar cómo estamos construyendo ciudad. En torno a proyectos autogestionarios de reconstrucción se puede vislumbrar procesos de transformación mayor respecto del modelo que hoy domina en los espacios de la vida productiva, social, valórica y cultural de nuestro país. En efecto, una experiencia de autogestión o cooperativismo puede tener en nuestro contexto un impacto altamente significativo, y puede en este sentido convertirse en germen de un proceso mayor de transformación social, política y cultural.

1. El terremoto de febrero y la reconstrucción en Chile

El terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 impactó a Chile en su totalidad, y con mayor profundidad y desgarró a las regiones del Maule y Biobío. En estas regiones la intensidad del terremoto provocó un posterior maremoto, siendo las más afectadas en pérdidas de bienes materiales y vidas humanas, quedando ciudades y poblados con alto nivel de daños, o incluso totalmente devastados.

La catástrofe y la posterior emergencia no fue bien enfrentada por los gobiernos de Bachellet y Piñera, develándose un mal diseño institucional para responder a desastres de esta magnitud. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) tuvo un lamentable desempeño, mientras el accionar de las Fuerzas Armadas fue objetivamente negligente ante el manejo del maremoto: no se dio aviso de la alerta de tsunami de acuerdo al protocolo existente para sismos de gran intensidad, y las mismas autoridades descartaban la posibilidad de maremoto aun horas después de que ya se había producido. No fue sino gracias a que el conocimiento popular se impuso, que la gran mayoría

de la población en las zonas costeras se trasladó a los cerros tan pronto ocurrió el terremoto, salvándose así miles de vidas.³

Por otra parte, en las primeras horas de la emergencia la tecnoburocracia, enredada entre los hechos y el concepto, no fue capaz de dar una respuesta adecuada y oportuna a la crisis de servicios y conectividad que se generó. Como contraparte a esta realidad, a pesar de que el discurso público nunca mencionó a las redes sociales como parte de la tarea, la solidaridad expresada en cientos de iniciativas de organizaciones y redes, grupos de amigos, voluntariado universitario, fue vital y efectiva en diagnosticar, recolectar y distribuir ayuda en las zonas más afectadas.

Efectivamente, a pesar de las trabas impuestas por las campañas comunicacionales y la militarización del territorio tras el terremoto, diversas iniciativas autogestionadas surgieron de personas y grupos anónimos que, desde la primera semana, comenzaron a coordinar acciones de ayuda urgente para los damnificados. Se movilizó ayuda en alimentos, artículos para mujeres, ancianos y lactantes, herramientas de trabajo, juguetes para los niños, manuales para enfrentar la emergencia, ayuda para animales, talleres de salud mental, así como la generación de ollas comunes, hornos y huertas comunitarias. En paralelo a la respuesta "oficial", grupos de distintos puntos del país llegaron a trabajar junto a las familias en la remoción de escombros y limpieza, y cientos de voluntarios colaboraron en levantar las primeras viviendas de emergencias o "mediaguas".

En materia de vivienda, se contabilizan alrededor de 370 mil viviendas con daños importantes, 190 mil de ellas destruidas o con daños severos. La respuesta del gobierno a la emergencia habitacional ha sido la entrega de mediaguas, que en colaboración con la ONG "Un

³ Al 16 de mayo se contabilizaban en todo el país, un total de 521 víctimas fatales y 56 desaparecidos, a lo que se suman más de 800 mil damnificados: heridos, sin vivienda, sin trabajo.

Techo para Chile”, al 21 de mayo sumaban 50 mil. Algunas de estas mediaguas se levantan en los terrenos de los propietarios de las viviendas destruidas o inhabitables, mientras para los allegados, o en el caso de los sectores costeros, se han armado campamentos o “aldeas” de mediaguas en las periferias de los poblados, en los cerros, lejos del mar, abriendo la pregunta de si se tratará de una localización meramente transitoria.

En los territorios más afectados el nivel de daño en materia de vivienda es evidente. Sin embargo, como en muchas zonas de la Región Metropolitana y de Valparaíso, en varios sectores la destrucción ocurrió al interior de las viviendas, y es por ello que se habla de un terremoto “mentiroso”, que vino a agravar situaciones preexistentes de precariedad habitacional, pobreza y aislamiento social.

Sobre todo en las zonas costeras más afectadas, a los daños en vivienda se suma la pérdida masiva de fuentes de empleo y herramientas de trabajo, a lo que se agrega una relación compleja de conflicto de intereses entre los pescadores artesanales y los empresarios portuarios.

En lo habitacional, a poco tiempo de ocurrido el terremoto, el gobierno lanzó la campaña “Chile unido reconstruye mejor”, que anuncia los beneficios que tendrán los damnificados en sus viviendas: subsidios para reconstrucción o reparación. A estos subsidios acceden individualmente las familias que demuestren su condición de damnificadas, y lo que se ha publicitado ampliamente desde el propio gobierno como solución definitiva, corresponde a viviendas prefabricadas, llegando incluso a promoverse en el portal web del MINVU, las viviendas ofrecidas por unas cuantas empresas.

Por otro lado, se dio curso también al plan “Manos a la obra”, consistente en entrega de bonos en dinero para reparación o mejoramiento de viviendas de emergencia. Curiosamente, como parte

de este plan fueron elegidas sin licitación pública tres empresas proveedoras de materiales: Construmart, Easy y Sodimac.

Mientras tanto, otros procesos comenzaron pronto a ocurrir. Familias de todas las ciudades afectadas denuncian que constructoras e inmobiliarias se les acercan con ofertas para comprar sus terrenos a precios que llegan al 25% de su valor, en algunos casos ofreciendo permutas por viviendas alejadas del centro, como una forma de aprovechar la desesperación de miles de familias que quedaron con sus viviendas inhabitables y sin recursos para demoler o reconstruir. Así, en distintas localidades se evidencian procesos en curso de expulsión frente a la avanzada de proyectos de desarrollo inmobiliario, turístico o empresarial, varios de ellos que ya venían por años intentando imponerse en las dinámicas de desarrollo urbano y territorial.

Por otro lado, en todas partes la lógica del mercado del suelo divide a los habitantes según su relación con la propiedad de la tierra. Allegados y arrendatarios, que muchas veces han habitado por décadas en un lugar, quedan en una zona difusa de la política pública, y excluidos de los procesos de reconstrucción territorial. En tanto, la mejor opción que se les ha ofrecido es acceder a una vivienda prefabricada por la vía del subsidio, que por los valores de los terrenos, probablemente serán localizadas en las periferias de las ciudades, haciéndose efectiva la expulsión masiva de población por razones de mercado.

Al acercarse a las experiencias concretas, se visualiza con mayor claridad la existencia de una estrategia deliberada por favorecer procesos de promoción del negocio inmobiliario y de desarrollo empresarial, que dejan fuera a la población, a la ciudadanía y la sociedad civil. Operan estrategias de desinformación, desorganización y división, mediante la instalación de conflicto y desconfianza entre los propios habitantes, estrategias que se montan sobre el shock, con una

clara intención de mantener a la gente pasiva frente al curso de los hechos. En algunos poblados también, a la estrategia comunicacional acompaña un fuerte cerco militar que controla y neutraliza incluso a los jóvenes voluntarios que se acercan a ofrecer ayuda a las comunidades.

La decisión política y económica del gobierno fue tomada. En informe de la Dirección Ejecutiva de Reconstrucción del 25 de mayo se presenta la estrategia de reconstrucción de al menos 12 grandes centros urbanos⁴, que se implementará a través de convenios de colaboración entre MINVU, Municipios, y equipos regionales, en base a una "Gerencia Regional de Proyecto", que contratará Universidades, consultoras e instituciones de fomento para establecer en cada ciudad un Plan Maestro y un Plan de Inversiones. El esquema de trabajo es la alianza público-privada, como parte de la estrategia de "reconstrucción sustentable", del gobierno.

Algunos ejemplos. En Constitución la reconstrucción quedó en manos de la empresa forestal y celulosa Arauco- Celco, al firmar en marzo un convenio con el municipio y el Ministerio de Vivienda, para diseñar un nuevo Plan maestro para la ciudad. La empresa se volvió prácticamente dueña del lugar, resolviéndose así, en la coyuntura del terremoto, un conflicto histórico de la empresa con los pescadores de la localidad y grupos ambientalistas, a favor del grupo empresarial. En Talca, a pesar de que inicialmente se había optado por la conformación de un consorcio de entidades sin fines de lucro y de organizaciones sociales, el alcalde entregó el plan de reconstrucción a una inmobiliaria. Lo mismo sucedió en Talcahuano con Cencosud, y se anuncian al menos siete convenios más de este tipo.

⁴ Santa Cruz, Curicó, Talca, Constitución, Pelluhue, Cauquenes, Linares, Parral, Dichato, Talcahuano, Coronel, San Juan Bautista (Juan Fernández).

2. Las bases para enfrentar un proceso de reconstrucción

A este escenario acompañan procesos de organización local por lo general incipientes, con pocas posibilidades efectivas de incidir en las decisiones político-económicas que se están tomando. Al golpe emocional por el miedo, nivel de pérdidas y daño, sigue la situación de emergencia, resolver la urgencia de la necesidad, que hace difícil que se levanten visiones de futuro.

La gran mayoría de las iniciativas de las organizaciones sociales no aparecen en los medios de comunicación masivos, y no dejan de ser expresiones puntuales. Décadas de políticas neoliberales y de prácticas clientelares que instrumentalizaron la participación social, muestran hoy sus resultados: dispersión y fragmentación de las luchas populares, frente a una demanda que generalmente se expresa en la *espera por una solución*, que llegue de las autoridades o de algún otro benefactor.

Sin embargo también el descontento social ha tenido algunas expresiones a lo largo de todo el país. Sólo en el último mes: en Penco, localidad de la región del Biobío, cerca de 50 familias armaron barricadas quemando una mediagua; de Cauquenes llegaron hasta el centro de la capital para manifestar su descontento por la falta de soluciones; el 13 de mayo más de 5000 estudiantes universitarios marcharon en Santiago para expresar descontento por falta de apoyo a estudiantes damnificados. El 1º de junio un grupo de familias de allegados de Chiguayante, emprendió la toma de un terreno aledaño al sector en que habitan, reclamando sus derechos a permanecer y contra la venta de terrenos a privados; el 2 de junio organizaciones de pobladores en Santiago marcharon exigiendo la participación de sus organizaciones en la reconstrucción. En algunos sectores también, grupos de vecinos resisten a ser expulsados y reivindican su derecho a seguir viviendo cerca del centro o junto al mar. Y así, a lo largo de estos meses ha habido movilizaciones de distintos grupos en las ciudades y

localidades de las regiones afectadas, así como también se han venido gestando algunas iniciativas de articulación de demandas que, si bien son incipientes, representan un avance en el campo de la fuerza popular.

La búsqueda de coordinación de fuerzas sociales orientada a objetivos comunes, resulta central. Sin embargo, es necesario pasar del rol reivindicativo a la búsqueda de soluciones, así como a la construcción de una política e institucionalidad social que de soporte a las propuestas. La organización debe concentrar sus esfuerzos en demostrar capacidad de idear y gestionar sus propias soluciones, siendo muy importante el respeto por la organización endógena en cada territorio y el nivel embrionario de las organizaciones que han surgido en la coyuntura del terremoto, evitando caer en la instrumentalización o el paternalismo que tienden a acompañar procesos en que se busca la expansión del movimiento popular "por arriba", replicando la lógica partidista y del aparato burocrático estatal.

La experiencia y los aprendizajes demuestran que efectivamente las crisis pueden ser una oportunidad para transformar y mejorar los contextos donde estas ocurren. El modelo de producción de ciudad y de vivienda en Chile ha generado agudas inequidades urbanas, alto nivel de segregación, fragmentación social y pobreza que, oculta bajo las cifras oficiales, se vive de manera individual y silenciosa. La voracidad y el descontrol del mercado de suelo desat en nuestros centros urbanos el fenómeno de expulsión de los pobres de la ciudad, que a todas luces se intensificará en la coyuntura del terremoto.

En este sentido, la situación de catástrofe otorga la posibilidad de plantearse cómo concretar experiencias autogestionarias, como una respuesta y también como una forma de acción política para promover un debate mayor en pro de la construcción de ciudades democráticas y estilos de vida más solidarios.

Hace ya tiempo que hemos venido discutiendo, en distintos espacios de la sociedad civil, con participación de organizaciones de base, en que se debe levantar con fuerza una contrapropuesta a lo que son las lógicas de mercantilización del suelo que hoy día se imponen. Es necesario evidenciar cómo en esta situación de crisis se profundiza el dominio territorial como base de negocios, al alero de políticas que propician la expulsión y segregación urbana.

No es sencillo discutir cómo se debe hacer la reconstrucción, más cuando hay procesos y políticas en curso, e incipientes procesos de organización. Sin embargo, podemos señalar algunas ideas que están siendo planteadas y puestas en circulación en torno a prácticas concretas de acompañamiento y colaboración a nivel local:

- En particular en los contextos destruidos por catástrofes naturales, se hace más importante que nunca recuperar la historia, la memoria, los vestigios, los recuerdos de la vida anterior; la recuperación de las luchas, de los procesos colectivos y personales, de sus experiencias y aprendizajes. Este ejercicio permitirá hacer contrapeso a la "máquina del olvido" que traen los procesos de reconstrucción por el mercado, así como otorga una base de conocimientos para reconstruir, y una visión, una motivación para el futuro.

- Luego, es desde el sentido que las propias comunidades, barrios y poblaciones, dan a su trayectoria, que debe transformarse en acción la voluntad de llevar adelante un proceso de reconstrucción. Los habitantes, sobre la base de una organización, consenso o construcción comunitaria, deben preguntarse y resolver temas como: ¿cómo se reconstruyen los espacios urbanos y comunitarios de los pueblos y centros urbanos?, ¿cuáles serán las mejores soluciones habitacionales para enfrentar la emergencia y cómo se reconstruirán las viviendas definitivas? ¿Cuáles son los recursos asignados y como se invertirán?

- Respecto a la articulación coyuntural y las estrategias institucionales, parte de las prácticas comunitarias de reconstrucción debe ser la relación con el Estado. Desde ahí se concibe y orienta la acción transformadora: la relación con el Estado es parte de la lucha social, no hay transformación del Estado si no se construye esa relación. En este sentido, deben establecerse mesas e instancias para la construcción de acuerdos entre distintos actores, con el fin de empujar un proceso de elaboración de propuestas de políticas que, originadas de la lucha social, logren penetrar en la estructura del Estado.

- Con relación a lo anterior, es fundamental reivindicar el ámbito del gobierno local, de los municipios. La reconstrucción requiere de descentralización en cuanto a toma de decisiones e inyección de recursos a escala local: las autoridades locales, en conjunto con las comunidades organizadas, deben estar preparados para la participación y exigir protagonismo en la toma de decisiones respecto a los procesos locales de reconstrucción.

- Cuando no hay voluntad política desde las autoridades locales, la comunidad organizada debe exigir que éstas ejerzan un efectivo rol de representación, esto es, hacer efectivo el gobierno y la democracia a nivel local. Luego, debe prepararse también para participar en los procesos de decisiones que se tomarán en el camino de la reconstrucción, por ejemplo, respecto a los planes de inversión. Especialmente en relación a los planes reguladores comunales, la comunidad debe capacitarse y avanzar en exigir una participación efectiva y vinculante. En este proceso es central que la comunidad logre desarrollar una propuesta propia de reconstrucción territorial.

3. Aportes de la perspectiva autogestionaria de la producción de Hábitat en la reconstrucción en Chile

Si bien difícilmente se podrá revertir la dinámica que impone la alianza público-privada en la reconstrucción a mayor escala, y del modelo mismo de producción de hábitat impuesto por más de 30 años en Chile, en distintos espacios del mundo social se discuten y proyectan alternativas que viabilicen procesos más democráticos y solidarios en la reconstrucción del hábitat, así como en la defensa de los derechos de pobladores y habitantes afectados por el terremoto.

Asimismo, desde una perspectiva regional, vemos que en América Latina se han impulsado procesos importantes en materia de autogestión del hábitat, con distintos resultados. Las experiencias latinoamericanas nos muestran que transitar al camino de la autogestión de hábitat es posible y necesario,⁵ y en particular en el escenario de la reconstrucción en Chile, la perspectiva autogestionaria puede resultar clave en diversos sentidos:

- Por un lado, es necesario viabilizar alternativas a las soluciones “únicas” que aparecen desde la visión pública y mediática. A través de procesos autogestionarios sería posible incorporar por ejemplo alternativas de reconstrucción con materiales de menor costo, como el adobe, procesos que podrían ser asumidos por las propias familias y comunidades. Así también, se podría trabajar en soluciones de hábitat que integren en el territorio a propietarios, allegados, arrendatarios, contribuyendo a democratizar los territorios y al desarrollo de la creatividad local, levantando prácticas solidarias y fraternas, en

⁵ Particularmente interesante resulta mirar hoy día la experiencia de México D. F. donde el terremoto del año 85 generó condiciones para que surgiera un Movimiento Popular Urbano que se puso a la cabeza de la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad. También en este camino se debe conocer la experiencia paradigmática del cooperativismo autogestionario de propiedad colectiva y ayuda mutua de la FUCVAM de Uruguay, y la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI en Buenos Aires, entre muchas otras.

oposición a la solución individual y estandarizada ofrecida a través del vigente sistema de subsidios y la oferta privada.

- El desarrollo de la noción de autogestión, en un escenario de disputa por el territorio como se está dando en los centros urbanos y borde costero, colabora con identificar el conflicto y hacerle frente desde las bases territoriales, desde los habitantes amenazados con ser expulsados, quienes, concientes de sus derechos y de la posición que ocupan en la disputa, podrán elaborar argumentos y alternativas para negociar colectivamente con las autoridades.

- Por otro lado, la reconstrucción tiene un costo para el país⁶, que es asumido por todos los chilenos a través de la venta de activos públicos, recorte de programas sociales y el alza relativa de impuestos. Parte de ese costo es absorbido como ganancia para los sectores empresariales que participarán del proceso, como ha ocurrido históricamente con los subsidios en vivienda. Alternativas autogestionarias permitirían que los recursos sean aprovechados íntegramente por los afectados y que no se conviertan en ganancias para las empresas, mejorando al mismo tiempo la calidad de las soluciones.

- El terremoto también, ha mostrado en el enfrentamiento de la emergencia, ser una oportunidad de restablecer tejido social. Asimismo, es posible proyectar esta dinámica en procesos de rehabilitación, reparación o reconstrucción, que impliquen la participación, el logro de acuerdos, la acción colectiva. En esta misma línea, el terremoto motivó el surgimiento de una nueva generación de líderes naturales que se va formando en el trabajo efectivo de la organización. La autogestión aplicada en procesos de reconstrucción tendría un gran potencial educativo, colaborando en que la comunidad

⁶ El terremoto dejó cerca de 30 mil millones de dólares en pérdidas. El costo de la reconstrucción, según los anuncios del 21 de mayo, es de 8.400 millones de dólares.

se haga conciente de sus capacidades y recursos, reforzando al mismo tiempo la identidad y los vínculos comunitarios.

- Por otro lado también, es importante el desarrollo de experiencias autogestionarias que demuestren capacidad de la organización social, que a futuro puedan tener impacto en las definiciones de políticas públicas en materias de vivienda y hábitat. Así por ejemplo, podría avanzarse en la formalización del traspaso directo de recursos estatales a las organizaciones para la autogestión de sus soluciones habitacionales, retomando una tradición de sistemas cooperativos, de autoconstrucción o ayuda mutua en la producción de hábitat en Chile.